

El terrorismo etarra, la gran cuestión pendiente

Bilbao/M. Luisa García Franco

El terrorismo etarra es la gran cuestión pendiente que tendrá que afrontar el nuevo gobierno de Euskadi. Los partidos políticos vascos, con la excepción de Herri Batasuna, suscribieron durante la pasada legislatura dos grandes acuerdos en esta materia, cuyo contenido fundamental era el rechazo a la negociación política con ETA, por entender que la organización terrorista no podía imponer con las armas su voluntad al pueblo vasco y que mientras los activistas de ETA vislumbraran la posibilidad de una salida negociada, que les daría en los círculos próximos a Herri Batasuna una imagen de «héroes» que habrían conseguido con su lucha armada reivindicaciones políticas para Euskadi, no iban a conformarse con la reinserción social que se les ofrece en estos momentos.

Sin embargo, el PNV ha dado marcha atrás en estos dos acuerdos considerados fundamentales por el resto de las fuerzas políticas vascas, excepto HB. El primero de ellos fue suscrito en Madrid durante el mandato de Carlos Garaicoechea y firmado, por parte del PNV, por el senador Joseba Elósegui, ahora militante de Eusko Alkartasuna, a quien su partido negó la representación del mismo.

Más tarde, durante el mandato de Ardanza, cuyo gabinete había firmado, nada más llegar a Ajuria Enea, un pacto de legislatura con los socialistas en el que se comprometía a rechazar la negociación política con ETA, todas las fuerzas políticas volvían a firmar un acuerdo, esta vez en el Parlamento vasco, con el que se pretendía cerrar la vía de la negociación política y se apostaba por la reinserción social. Sin embargo, el PNV renegaría una vez más públicamente de ese acuerdo que había firmado su grupo parlamentario en Vi-



■ **Rechazo social a la violencia de ETA.**—En los últimos cuatro años se han producido avances y retrocesos en la lucha política contra el terrorismo, pero hay algo en lo que se ha notado un cambio sustancial, en la extensión del rechazo social a la violencia de ETA en el seno de la sociedad vasca. En la fotografía, una vista general de la plaza de la República Argentina de Madrid, después de que hiciera explosión un coche bomba al paso de un autocar de la Guardia Civil.

toría con continuas declaraciones y hasta con la práctica política.

La ambigüedad del PNV

Este verano, después de dos encuentros con Herri Batasuna para debatir las posibles bases de una negociación entre el Estado y ETA, cuya posibilidad fue negada siempre por el Gobierno socialista, el PNV y el propio Gobierno vasco mantuvieron contactos con el entonces máximo dirigente de ETA, Domingo Iturbe Abásolo, «Txomin». Ardanza, que había recibido desde que llegara a Ajuria Enea docenas de mensajes de ETA expresando el deseo de negociar, y que los había ignorado, quiso probar también esa vía, convencido de que «esa vez iba en serio», porque ETA planteaba un contacto con interlocutores del Estado, sin condiciones y en un lugar secreto. Sin embar-

go, no logró, a pesar de su gestión personal, una respuesta de la Moncloa.

La prueba más evidente de la ambigüedad del PNV en este tema es el «plan contra la violencia» presentado por José Antonio Ardanza en vísperas de la campaña electoral. En el no se descartaba la negociación política con ETA, «caso de ser posible», lo que, según dijo Ardanza al hacerlo público, no choca con la declaración contra la violencia aprobada por unanimidad en el Parlamento vasco, en la que se negaba cualquier posibilidad de pactar contenidos políticos con las organizaciones terroristas.

Rechazo a la negociación política

Según los socialistas, la actuación prioritaria del nuevo Gobierno vasco en el tema de la lucha contra la vio-

lencia sería conseguir la lealtad de todas las fuerzas políticas democráticas al compromiso adquirido en la declaración institucional del Parlamento vasco.

El Gabinete de Ardanza se ha posicionado durante su mandato más duramente que el de su antecesor, Carlos Garaicoechea, contra el terrorismo de ETA. Sin embargo, cara a la campaña electoral, los nacionalistas de Arzallus mantenían la ambigüedad sobre el rechazo a la negociación política con la organización armada, mientras que Carlos Garaicoechea se presentaba a estas elecciones con un programa, el de Eusko Alkartasuna, en el que se rechazaba firmemente la negociación política con ETA, por entender que esta organización no podía atribuirse la representación del pueblo vasco, aunque luego el ex lendakari matizara que el diálogo, del que sí se muestra ahora partidario, empezaba no se sabía dónde ni cuándo y acababa en las mismas circunstancias.

En el «decálogo» contra la violencia elaborado por el Ejecutivo autónomo en marzo de 1985 se proponía otra innovación, ésta muy bien acogida por otras fuerzas políticas como el PSOE y la Coalición Popular, un «plan de concienciación ciudadana», pero que nunca llegó a realizarse.

En la campaña electoral, el PNV ha insistido en dos puntos fundamentales que están en el último plan contra la violencia del Gobierno vasco, elaborado el cinco de noviembre: la conveniencia de que la Ertzaintza se haga cargo del mantenimiento del orden público en Euskadi y que su paulatino despliegue vaya acompañado por un repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado y el rechazo a una jurisdicción especial —la ley Antiterrorista— y a las jurisdicciones extraordinarias —la Audiencia Nacional—.